

Patricia Lozano Sanabria

●● Tollocan 944

Una ciudadanía más allá de las urnas



América Latina y el Caribe han conseguido algo que hace apenas unas décadas parecía poco probable para algunos observadores: mantener a la democracia como la principal forma de gobierno. Sin embargo, conservar elecciones periódicas no significa que la democracia esté plenamente consolidada. El Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que las instituciones democráticas están actualmente sometidas a presiones crecientes y que muchas personas sienten que sus necesidades no son escuchadas. El razonamiento es claro: la democracia no puede reducirse al momento de votar, sino que debe reflejarse en derechos, oportunidades y mejores condiciones de vida.

Esta idea resulta especialmente relevante

para México ante el proceso electoral de 2027. Por una parte, la ciudadanía electoral nos permite elegir representantes, participar en campañas, vigilar los comicios y exigir que se respete el voto. Pero la ciudadanía social debe ir más allá al garantizar que las personas puedan acceder efectivamente a la educación, salud, seguridad, justicia, empleo digno, conectividad o servicios públicos, sin importar su ingreso o el lugar donde habitan. Cuando esos derechos existen únicamente en el papel, pero no en la experiencia cotidiana, la participación política tam-

bién se vuelve desigual: no todos cuentan con el mismo tiempo, información, seguridad o recursos para hacer valer su voz.

El informe del PNUD muestra justamente esa contradicción. Aunque la región ha avanzado en salud, educación e ingresos, continúa como una de las más desiguales del mundo. Esta brecha tiene consecuencias políticas que debemos tomar en cuenta seriamente. Una persona que vive con miedo, sin servicios básicos o sin oportunidades difícilmente percibirá que la democracia está resolviendo sus problemas. Por ello, la insatisfacción con su funcionamiento alcanza, de acuerdo con el reporte, cerca de dos terceras partes de la población regional. No se trata necesariamente de un rechazo a la democracia, sino de una exigencia para que produzca resultados concretos y distribuya sus beneficios de forma más justa.

A estas deudas se suman nuevas amenazas. La polarización convierte al adversario en enemigo; la desinformación deteriora

la conversación pública; los algoritmos pueden amplificar prejuicios y noticias falsas; y el crimen organizado puede limitar la libertad de las comunidades e incluso distorsionar la competencia política. Frente a estos riesgos, no basta con pedir a la ciudadanía que vote de manera informada. Es necesario proteger el espacio cívico, fortalecer la educación democrática y digital, garantizar la seguridad de quienes participan, cuidar la autonomía de las autoridades electorales y abrir canales permanentes para que las personas influyan en las decisiones públicas, no únicamente durante las campañas.

De cara a 2027, México tiene la oportunidad de entender el proceso electoral como parte de una tarea más amplia. Esto exige elecciones confiables, pero también instituciones capaces de convertir las decisiones colectivas en políticas públicas, bienes y derechos efectivos. Cerrar las brechas de ciudadanía social significa que el lugar de residencia, el género, el origen, la edad o el nivel de ingreso no determinan quién puede participar y quién permanece al margen. La democracia se fortalece cuando votar importa, pero también cuando las personas comprueban, en su vida diaria, que su voz cuenta y que las instituciones pueden ayudarlas a construir un futuro con bienestar. ●

A estas deudas se suman nuevas amenazas. La polarización convierte al adversario en enemigo; la desinformación deteriora la conversación pública; los algoritmos pueden amplificar prejuicios y noticias falsas